



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**INFORME SECRETARIAL**

Barranquilla, 25/09/2020

<b>Radicado</b>	<b>08-001-33-33-014-2020-00160-00</b>
<b>Medio de control o Acción</b>	<b>Conciliación Extrajudicial</b>
<b>Demandante</b>	<b>María Nubia Henao Amorocho</b>
<b>Demandado</b>	<b>Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.</b>
<b>Juez(a)</b>	<b>Guillermo Osorio Afanador</b>

<b>INFORME</b>
Señor Juez, paso a su despacho, informándole que la Procuraduría 63 Judicial I Administrativa de esta ciudad, envía el presente expediente de conciliación extrajudicial para su pronunciamiento.

<b>PASA AL DESPACHO</b>
Para analizar eventual aprobación.

<b>CONSTANCIA</b>
Expediente que consta de los siguientes documentos en formato PDF : Acta de Reparto; Archivo No. 1 Solicitud de Conciliación; Archivo No. 2 Auto Admisorio; Archivo No. 3 Acta Aplazamiento; Archivo No. 4 Poder Abogado; Archivo No. 5 C.C. y T.P. Samuel Orjuela; Archivo No. 6 Anexos Poder apoderado CASUR; Archivo Mo. 7 Poder CASUR; Archivo No. 8 Liquidación de Partidas; Archivo No. 9 Ficha Técnica y Archivo No. 10 Acta Acuerdo Conciliación.

**ALBERTO OYAGA LARIOS**  
**SECRETARIO**

<b>Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno</b>	<b>Firma de Revisado</b>



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020).

<b>Radicado</b>	<b>08-001-33-33-014-2020-00160-00</b>
<b>Medio de control o Acción</b>	<b>Conciliación Extrajudicial</b>
<b>Demandante</b>	<b>María Nubia Henao Amorocho</b>
<b>Demandado</b>	<b>Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.</b>
<b>Juez(a)</b>	<b>Guillermo Osorio Afanador</b>

**I. ANTECEDENTES**

Mediante solicitud radicada ante la Procuraduría 63 Judicial I para asuntos Administrativos, la señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, a través de apoderado, solicitó se convoque a Conciliación Extrajudicial a la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el objeto de conciliar el pago del incremento salarial del IPC al que considera tener derecho, correspondiente a su asignación de retiro a partir del año 1997, así como los intereses moratorios que se causen hasta el momento en que se legalice dicha conciliación.

Mediante auto de fecha 1° de julio de 2020, fue admitida la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 17 de junio del mismo año, fijándose fecha para la Audiencia el 06 de agosto de 2020. Sin embargo, la misma fue aplazada para el día 02 de septiembre del año en curso.

La audiencia fue realizada en la fecha mencionada, en la que estuvieron presentes el apoderado de la parte convocante, abogado PEDRO MANUEL SANCHEZ MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.634.552 y T.P. N° 74.047 del C.S. de la J., y en calidad de apoderado de la parte convocada el Dr. SAMUEL ANTONIO ORJUELA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.204.086 y T.P. N° 137.728 del C.S. de la J. Ambos apoderados contaban con facultades expresas para conciliar en representación de las partes del proceso de la referencia.

En desarrollo de la diligencia se estableció:

*“(…) DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. Se le concede el uso de la palabra a la parte CONVOCANTE quien manifiesta: “Me ratifico en las pretensiones de la solicitud, las cuales consisten en: 1. Conciliar los efectos patrimoniales del acto administrativo, contenido en el oficio con radicación al contestar E-01524-201824680-CASUR id 377740, de fecha 22-11-2018, expedido por el ente convocado Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dirigido a la beneficiaria, por medio del cual esa entidad responde de manera desfavorable la petición presentada por mi representada. 2. Que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, reconozca y pague a mi mandante MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, identificada como viene escrito, en calidad de compañera permanente sustituta del extinto Ag. ® EMIL AUGUSTO BERMUDEZ MUÑOZ, las diferencias en el reajuste anual de su asignación de retiro, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajustado su valor con la fórmula establecida para tal fin, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, desde*

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta verificar la el pago a su favor. 3. En virtud de lo anterior, se solicita a CASUR presente la propuesta de liquidación y pago de las diferencias por concepto de I.P.C.; arrastrando esos valores debidamente indexados y se ajuste la pensión desde el año 1997, hasta el 2020 o hasta la fecha en que se haga efectivo su pago. 4. Que al momento de presentar la entidad convocada la propuesta de liquidación, aplique la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 113 del Decreto 1213 de 1990.” Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la convocada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL- CASUR doctor SAMUEL ORJUELA, quien manifiesta: ““Con anterioridad a la celebración de la presente audiencia virtual envié al correo electrónico de la Procuradora la posición del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL- CASUR, contenida en la certificación de fecha 2 de septiembre de 2020, suscrita por el Secretario Técnico del mismo JORGE ORLANDO SIERRA CARDENAS, Profesional de Defensa Técnica 3-1- 10, en la que se expresó que:

El concepto jurídico, se orienta a definir si la Señora, MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, C.C. No. 32.630.511, sustituta de la asignación mensual de retiro del Agente ® EMIL AUGUSTO BERMUDEZ MUÑOZ (Q.E.P.D.), C.C. No. 7.409.193 tiene derecho al reajuste y pago de su Asignación mensual de retiro por concepto de IPC desde el año 1997, a la fecha como sustituta de la asignación mensual de retiro, del Agente ® EMIL AUGUSTO BERMUDEZ MUÑOZ (Q.E.P.D.), C.C. No. 7.409.193.

2.- Por ser derechos ciertos e indiscutibles el derecho como tal no tiene caducidad, se debe tomar la prescripción cuatrienal contenida en el decreto 1213 de 1990, Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional, en su artículo 113; así:

ARTICULO 113. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto, prescriben en cuatro (4) años que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles.

El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho o prestación determinada interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasaría a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es decir desde el momento en que el derecho se hizo exigible esto es el 20 de octubre de 2018, día en que la hoy convocante Señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, elevo derecho de petición radicado bajo el ID 376838, el cual fue contestado el día 22 de noviembre de 2018, mediante oficio con número de radicación E-01524-201824680-CASUR Id: 377740, donde la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “CASUR”, negó lo solicitado por la actora en sede administrativa, pero la instó a realizar conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, tomándose la Prescripción Cuatrienal desde el día 20 de octubre de 2014 a la fecha de realización de la Audiencia de conciliación esto es el día 02 de septiembre de 2020.

3.- Evitar condena en Costas y Agencias en Derecho en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL Es dable reconocer y pagar a la sustituta de la asignación mensual de retiro, Señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.630.511, el Índice de Precios al Consumidor para los años 1997 el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior para los señores Agentes de la Policía Nacional fue del 21.63% y el incremento salarial fue del 18.87%; para el año 1999 IPC fue del

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

16.70% y el Incremento salarial para este año fue 14.91% y para el año 2002 el IPC fue del 7.65% y el aumento salarial del 6.00%, por lo tanto se deben de cancelar estos tres (03) años, es decir 1997, 1999 y año 2002, teniendo en cuenta que el incremento salarial estuvo por debajo del Índice de Precios al consumidor IPC certificado por el DANE.

Se debe de cancelar teniendo en cuenta las políticas establecidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el Acta No. 03 del 16 de Enero del año 2020, ratificación Política Institucional para la prevención del daño antijurídico numeral 1 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, del Comité de Conciliaciones CASUR; así; el 100% del capital, el 75% de indexación; teniendo en cuenta la prescripción cuatrienal que habla el decreto 1213 del año 1990, en su artículo 113; es decir desde el momento en que el derecho se hizo exigible esto el 20 de octubre de 2018, día en que la hoy convocante Señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, elevo derecho de petición radicado bajo el ID 376838, el cual fue contestado el día 22 de noviembre de 2018, mediante oficio con número de radicación E- 01524-201824680-CASUR Id: 377740, donde la CAJA DE SULDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL "CASUR", negó lo solicitado por la actora en sede administrativa, pero la instó a realizar conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, tomándose la Prescripción Cuatrienal desde el día 20 de octubre de 2014 a la fecha de realización de la Audiencia de conciliación esto es el día 02 de septiembre de 2020.

Una vez aprobada la conciliación por el Juez Administrativo, el Apoderado convocante allegará los documentos a CASUR y la entidad pagará dentro de los seis (6) meses siguientes, una vez radicada la documentación ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.

Una vez revisado el expediente administrativo enviado por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR, SE VERIFICA que no reposa documento alguno en que conste que a la Señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.630.511, haya recibido valor alguno por concepto de Índice de Precios al Consumidor (IPC), por parte de la entidad. En los anteriores términos al comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto le asiste ánimo conciliatorio."

Bajo los parámetros antes indicados a la entidad, le asiste ánimo conciliatorio en el presente caso, teniendo en cuenta las Políticas establecidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el Acta No. 3 del 16 de enero del año 2020, del Comité de Conciliaciones CASUR, numeral 1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOS IPC.

El comité recomienda CONCILIAR, en el presente asunto, ofreciendo como fórmula conciliatoria, las siguientes sumas, que se extraen de la liquidación realizada y cuyo archivo hace parte integral de esta propuesta conciliatoria:

Valor de Capital Indexado: \$ 9.438.000.

Valor Capital 100%: \$ 8.632.181.

Valor Indexación: \$ 805.819.

Valor indexación por el (75%): \$ 604.364.

Valor Capital más (75%) de la Indexación: \$9.236.545.

Menos descuento CASUR -: \$355.542.

Menos descuento Sanidad -: \$ 322.303.



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

VALOR A PAGAR; \$ 8.558.700.

INCREMENTO MENSUAL DE LA ASIGNACION DE RETIRO: \$ 121.818

(...)"

La parte convocante aceptó la propuesta presentada por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.

**POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:** El señor Agente del Ministerio Público avaló el acuerdo conciliatorio manifestado que "(...) *el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y reúne los siguientes requisitos: el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998); las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo; que el precedente jurisprudencial ha sido ampliamente tratado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en cuanto al reconocimiento del reajuste de la mesada pensional con base en el IPC, dentro del régimen especial de la policía y de las fuerzas militares. Señala, además, que el precedente judicial vertical es claro al afirmar que los miembros de la fuerza pública tienen derecho al reajuste de su mesada pensional conforme al IPC cuando este es mayor a la aplicación del principio de oscilación entre los años 1997 y 2004, a pesar de que no tengan derecho al pago de la diferencia de éstas por haber operado la prescripción de la mesada. De igual forma, es menester señalar que la liquidación presentada por la parte convocante tuvo en cuenta la aplicación de la prescripción cuatrienal de las mesadas del convocante y el tiempo en la cual se cancelaría, evitando así el respectivo detrimento patrimonial. En este sentido es viable esta conciliación, pues no encuentra esta Procuradora violación directa del ordenamiento jurídico y constitucional por parte del acto ficto producto del silencio administrativo de CASUR que rechazó la petición del convocante realizada el 20 de octubre de 2018, por lo tanto, es viable que se considere revocado con esta conciliación conforme al artículo 93 del CPACA. Así mismo, que se cumplen todos los rigorismos fácticos y jurídicos, para llegar al presente acuerdo conciliatorio y en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público; por lo que se procede a declarar la conciliación en los anteriores términos, y se somete a consideración del Señor Juez para los fines que él considere pertinente. (...)"*

## II. CONSIDERACIONES

Este Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en las normas legales sobre conciliación, contenidas en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y decreto reglamentario 1716 de 2009, pasa a revisar el acuerdo conciliatorio de la referencia, a fin de determinar si procede o no su aprobación.

De haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, sería de contenido patrimonial, y podría ser dilucidado ante esta Jurisdicción, a través del medio de control correspondiente, por lo que cumple con el requisito de procedibilidad de que habla el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

### 2.1. Conciliación extrajudicial efectuada

La conciliación extrajudicial que se trae a este Despacho Judicial, celebrada el 02 de septiembre de 2020, ante la Procuraduría 63 Judicial I para asuntos Administrativos, lo es

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

en relación con el reconocimiento y pago del incremento salarial del IPC a que tiene la señora **María Nubia Henao Amoroch**, correspondiente a su sustitución de asignación de retiro a partir del año 1997, así como los intereses moratorios que se causen hasta el momento en que se legalice dicha conciliación.

Se concilió la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS (\$8.558.700).

## **2.2. Consideraciones del Ministerio Público**

El Delegado del Ministerio Público ante quien se surtió la presente conciliación extrajudicial, avaló el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes y solicitó al despacho que conociera de la misma, impartir aprobación, tomando como fundamento que existen pruebas suficientes para ello y que además dicho acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento ya que se encuentra establecido que el pago se realizará una vez ejecutoriado el auto que aprueba la conciliación, el acuerdo se ajusta al ordenamiento legal y no resulta lesivo para el patrimonio público.

## **2.3. Requisitos para la aprobación de las conciliaciones extrajudiciales.**

La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, fue introducida en nuestra legislación por la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015; además, por la Ley 1285 de 2009 mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996. En los procesos contenciosos administrativos sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y de contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En la Parte III, Título I, Capítulo 2, de la Ley 446 de 1998, se establecen las normas generales aplicables a la conciliación contenciosa administrativa, y en relación con los aspectos sustanciales necesarios para aprobar un acuerdo conciliatorio, el artículo 73 dispone:

**“Art. 73. Competencia.** La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así:  
“Artículo 65 A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.

(...) **La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público**” (negrilla fuera de texto).

El H. Consejo de Estado, en providencia del 20 de febrero de 2014<sup>1</sup>, señaló, reiterando la posición que ha mantenido al respecto, que la conciliación se encuentra sometida a los siguientes supuestos de aprobación<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> H. CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Providencia 20 de febrero de 2014, Expediente Radicación N°. 25000232600020100013401 (42.612). C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

<sup>2</sup> Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003, Sección Tercera.

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

“8. El artículo 73 de la Ley 446 de 1998, establece que la autoridad judicial *“(…) improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”* y el parágrafo segundo del artículo 81 de la misma ley – modificadorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991- dispone que *“No habrá lugar a conciliación cuando la acción correspondiente haya caducado”*.

De acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:

- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
- Que las entidades estén debidamente representadas.
- Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto del convenio.
- Que no haya operado la caducidad de la acción.
- Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
- Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrojado a la actuación.
- La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada (art. 81, L. 446 de 1998, art.63, Decreto 1818 de 1998)."

#### **2.4. CASO CONCRETO**

Revisado el expediente, se advierte que en el mismo se encuentran las siguientes pruebas arrojadas con la solicitud:

- Poder para actuar con la facultad expresa de conciliar. (fl. 47).
- Derecho de Petición presentado el 20 de noviembre de 2018 ante CASUR (fl. 14).
- Copia del Oficio No. E-01524-201824680-CASUR Id: 377740 del 2018-11-22, emanado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio del cual se le da respuesta a la reclamación del incremento con base en el IPC para su asignación de retiro y a su vez se le conmina a conciliar (fls. 20-23).
- Copia de Hoja de Servicios No. 7409913 emanada por la Dirección de Personal de la Policía Nacional del señor Emil Augusto Bermúdez Muñoz (q.e.p.d.) (fl. 44).
- Resolución No. 0034 del 15 de enero de 1993, por medio del cual se le reconoce una asignación de retiro al señor Emil Augusto Bermúdez Muñoz (q.e.p.d.) (fl. 7-8).
- Resolución No. 6880 del 12 de agosto de 2013, por medio de la cual se reconoce una sustitución de asignación de retiro a la señora María Nubia Henao Amorocho (fls. 10-12).
- Certificación de los porcentajes de incremento que se la han realizado a la asignación de retiro del extinto agente Emil Augusto Bermúdez Muñoz desde 1993 a 2018 (fl. 27).

Asimismo, dentro de la audiencia de conciliación fueron allegados los siguientes documentos:

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

- Poder otorgado con copia autenticada de certificado de representación legal.
- Cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del apoderado de CASUR, Dr. Samuel Antonio Orjuela Ochoa.
- Liquidación del reajuste ordenado por el Despacho Judicial.
- Copia del Certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.
- Cuadro de Pre-liquidación de la indexación del IPC Antecedentes administrativos del señor MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO.

Este Despacho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 73 y 81 de la Ley 446 de 1998 al igual que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, pasará a revisar el acuerdo conciliatorio en comento.

Ahora bien, realizadas las acotaciones anteriores, advierte el Despacho que el trámite conciliatorio bajo estudio, es susceptible de aprobación, por lo siguiente:

Para el Juzgado es claro que de haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, éste sería de contenido patrimonial, y podría ser dirimido ante esta Jurisdicción, a través del medio de control contencioso administrativo establecido para tal efecto, por tratarse de diferencias suscitadas en virtud de una relación laboral. Por consiguiente, cumple con el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

Así mismo, la conciliación fue suscrita entre los apoderados especiales de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y de la señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO, quienes otorgaron a sus apoderados judiciales la facultad de conciliar, por lo que estuvieron debidamente representadas en el trámite conciliatorio.

Ante la Procuraduría 63 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla fueron allegados por la parte convocante los documentos que acreditan que con el acuerdo conciliatorio no se generaría lesión a intereses patrimoniales del Estado.

En efecto estima el Despacho que el acuerdo conciliatorio está lo suficientemente sustentado, en la medida que obra en el expediente copia de la Resolución 6880 del 12 de agosto de 2013, por medio de la cual se reconoce una sustitución de asignación de retiro a la señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO.

Sobre este requisito es pertinente señalar que pese a que la pensión es un derecho irrenunciable, y que por tanto, en principio no procede la conciliación prejudicial, se ha entendido que cuando no se menoscaban los derechos irrenunciables, sino que por el contrario, la conciliación prejudicial protege el derecho, se concluye la procedencia de la conciliación prejudicial.

En el presente caso, no se están desconociendo derechos irrenunciables en la medida que el capital adeudado por concepto de mesadas pensionales se reconoce en un 100%, conciliando las partes sólo en relación con la indexación, la cual, puede conciliarse por tratarse de un derecho puramente económico.

Al respecto, estima el Despacho pertinente citar el pronunciamiento del H. Consejo de Estado en la materia, cuyas consideraciones resultan aplicables a la presente *Litis*.

“Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no escritas y no pueden

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable.”<sup>3</sup>

(...)

Así las cosas, siendo legal en sí misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que: “Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegue a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental”<sup>4</sup>

Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a “allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.”<sup>5</sup>

Por tanto se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido<sup>6”7</sup>

Además, como prueba de los valores conciliados se encuentra el Certificado del Comité de Conciliación de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y obra liquidaciones del valor a reajustar y de las liquidaciones del IPC.

Así las cosas, el acuerdo conciliatorio no sólo encuentra fundamento probatorio, sino que encuentra asidero jurídico, en la medida que parte de la consideración que las asignaciones de retiro deben actualizarse con base en el IPC, cuando éste incremento resulta más favorable que el principio de oscilación, teniendo como límite máximo la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, momento a partir del cual opera nuevamente dicho principio.

Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto en un pronunciamiento reciente por el H. Consejo de Estado y que constituye postura unificada en la materia:

“La Sala manifiesta que de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia del 17 de mayo de 2007, ha insistido en que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro, anualmente, y teniendo en cuenta la Ley 238 de 2005. En consecuencia, el reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tiene lugar de conformidad con el IPC, en tanto resulta más favorable que el resultante de la aplicación del principio de oscilación. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el reajuste no se hace más de acuerdo con el IPC, sino aplicando el índice de oscilación previsto en el artículo 42 de aquel decreto, pero en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó

<sup>3</sup> Sentencia T-1008-99 del 9 de diciembre de 1999, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>4</sup> T-232 de 1996, M.P Alejandro Martínez Caballero.

<sup>5</sup> T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

<sup>6</sup> T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

<sup>7</sup> Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia de 14 de junio de 2012. Radicación número 25000-23-25-000-2008-01016-01 (1037-11). C.P Gerardo Arenas Monsalve.

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

con base en la variación porcentual del IPC respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

- Una interpretación contraria desconocería los artículos 48 (inciso 6) y 53 (inciso 3) de la Constitución, que contemplan el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, el cual, en últimas, es un desarrollo del derecho a la igualdad, de la protección especial sobre las personas de la tercera edad, de la protección al mínimo vital y móvil. Una prestación pensional es el medio que permite amparar a un trabajador de las contingencias a las que se puede enfrentar en desarrollo de su actividad laboral (vejez, invalidez, muerte), entonces, negar el derecho a su reajuste afectaría su capacidad de subsistencia y la de su entorno familiar. Para respaldar este argumento, la Sala cita la sentencia T-020 de 2011, del magistrado ponente Humberto Sierra Porto, de la Corte Constitucional.

- La posición de la Sala no genera un doble reajuste. Además, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 promueve el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en ningún caso, este principio puede servir de excusa para desconocer derechos adquiridos como el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares.”<sup>8</sup>

En razón de tales fundamentos fácticos y jurídicos puede concluirse que el acuerdo conciliatorio no resulta lesivo para el patrimonio público, sobre todo considerando que se está aplicando la respectiva prescripción cuatrienal, conforme al Decreto 1211 de 1990, aplicable por haberse causado el derecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2004.

Por las razones expuestas, considerando que el acuerdo conciliatorio cumple los requisitos formales y materiales, el Despacho procederá a impartirle aprobación al mismo.

Así las cosas, este operador judicial considera que resulta procedente impartir aprobación al acuerdo conciliatorio en cuanto a que no hay renuncia de derechos laborales ciertos; se tiene que la conciliación presentada no está viciada de nulidad y que verificado que se reúnen las condiciones legales para su aprobación, en cuanto a que este operador judicial tiene competencia para ello, no opera el fenómeno de la caducidad, que se estableció lo concerniente a la prescripción cuatrienal, fueron determinadas las formas de pago, se allegó constancia del Comité de Conciliación y las partes están legitimadas para conciliar, adicionalmente, la entidad convocada se compromete a pagar a la señora **MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO**, el reajuste de su asignación de retiro con base al I.P.C., para los años de 1997 a 2004, en la forma como fue pactado ante la Procuraduría 63 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, con la aclaración de que la aprobación que hace el Juzgado es en los mismos términos en que fue autorizada por el comité de conciliación. Es decir, en cuanto a que la conciliación comprende el pago del 100% del capital adeudado y el 75% de la indexación.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,

**RESUELVE:**

---

<sup>8</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Fecha: 15 de noviembre de 2012 Radicación número: 2500023250002010005111 01.

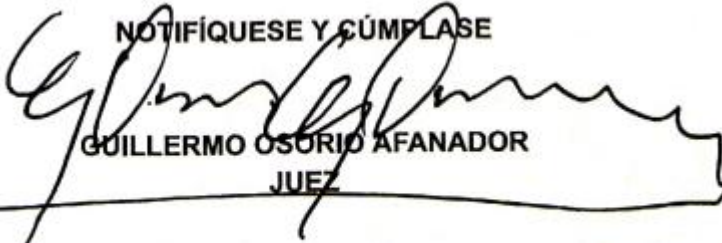
**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PRIMERO. – APROBAR** el acuerdo conciliatorio suscrito por la señora MARIA NUBIA HENAO AMOROCHO y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, el dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020) ante el Procurador 63 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, conforme a las razones anotadas en esta providencia.

**SEGUNDO. –** Por Secretaría, se expedirán las copias respectivas con constancia de su ejecutoria.

**TERCERO.-** Ejecutoriado este auto y surtido el trámite anterior, háganse las respectivas anotaciones en el sistema y archívese el expediente.

**CUARTO:** Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**  
  
**GUILLERMO OSORIO AFANADOR**  
**JUEZ**

NOTIFICACION POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRONICO  
N° 110 DE HOY **28/09/2020** A LAS 8:00 A.M.



**ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS**  
**SECRETARIO**  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL  
ARTICULO 201 DEL CPACA